

Responsabilidad mediante sanciones para poner fin a la Nakba en curso

Mayo de 2026 marca 78 años de la Nakba en curso y 31 meses de genocidio en la Franja de Gaza: crímenes israelíes en curso [financiados por los Estados occidentales coloniales](#), lo que revela el grado y la profundidad de su complicidad. El régimen israelí lleva adelante de forma incesante su [Plan Decisivo](#), caracterizado por: el genocidio en curso en la Franja de Gaza; la escalada de la expansión colonial en Cisjordania; y la implementación de una campaña destinada a eliminar la presencia y la protección de agencias y organizaciones internacionales, incluida la UNRWA. Mientras los crímenes israelíes de transferencia y desplazamiento forzado, colonización, apartheid e incluso genocidio se normalizan, la brecha de protección que enfrentan los refugiados palestinos se amplía aún más. La inacción y la complicidad de los Estados también son responsables de la replicación del modelo genocida del régimen israelí en el Líbano. Mientras el movimiento global de solidaridad [impulsa sanciones militares, económicas y políticas](#), el pueblo palestino continúa su lucha por la liberación.

Debido a la Nakba en curso perpetrada por el régimen israelí y a la persistente inercia y complicidad de los Estados, los refugiados palestinos y los desplazados internos (IDP) constituyen la población desplazada más numerosa y el desplazamiento más prolongado del mundo. Con 10,15 millones de personas —de las cuales 9,238 millones son refugiados y 914.500 desplazados internos— esta población representa el 66% del pueblo palestino.

La manifestación actual de la Nakba en curso se concreta en el Plan Decisivo israelí. El plan busca eliminar la autodeterminación palestina y el derecho al retorno mediante la imposición del dominio israelí, el apartheid espacial y el desplazamiento forzado. En Cisjordania, los palestinos son desplazados y sus comunidades aisladas a través del sistema de cierres, los ataques de colonos, la confiscación de tierras y la represión de toda forma de resistencia. Las políticas israelíes de [apartheid espacial](#) se han intensificado para fragmentar aún más a los palestinos y su territorio en macro y microenclaves. Desde 2023, [5.800 palestinos han sido desplazados](#) y 38 comunidades han sido completamente despobladas en Cisjordania y Jerusalén debido a incursiones israelíes, ataques de colonos y demoliciones de viviendas. Además, más de [33.000 refugiados palestinos](#) siguen desplazados de los campos vaciados y fragmentados de Tulkarem, Nur Shams y Yenín desde enero de 2025, tras la “Operación Muro de Hierro”. El sistema de cierres israelí se caracteriza por más de [925 obstáculos a la movilidad](#), incluidos al menos [384 portones de hierro](#), la expansión de carreteras de circunvalación exclusivas para colonos y planes para construir 34 nuevos asentamientos en 2026 en toda Cisjordania y Jerusalén.

[En Jerusalén](#) y en la Palestina de 1948, el régimen israelí ha acelerado la represión de los palestinos, con un aumento de demoliciones de viviendas, arrestos masivos, confinamiento en enclaves mediante zonificación y planificación discriminatoria, y vigilancia disfrazada de “seguridad”.

En la Franja de Gaza, casi los [2,1 millones de palestinos](#) han sido desplazados internamente al menos seis o siete veces y carecen de refugio adecuado, atención sanitaria y educación. El bloqueo israelí en curso y las restricciones a la ayuda han agotado alimentos, agua, medicamentos y otros bienes esenciales, provocando una mayor desnutrición que destruirá [a toda una generación](#). Desde la falsa tregua, el régimen israelí ha matado a [XXX palestinos](#). Al continuar provocando deliberadamente la desnutrición y un entorno coercitivo, a los palestinos solo les quedan tres opciones, según el Plan Decisivo: rendirse, huir o ser asesinados. Además, la

imposición de la “línea amarilla” ha creado un enclave dentro del enclave, aislando a los palestinos en aproximadamente el [42% de la Franja de Gaza](#).

Bajo la presión e influencia de la administración Trump, [la Resolución 2803 del Consejo de Seguridad de la ONU](#) incorporó el plan de 20 puntos de Trump, en contradicción con el derecho internacional, legitimando los objetivos coloniales del régimen israelí mediante la creación del “[Board of Peace](#)” (BoP). El BoP —en el que, de forma inexplicable, participa el propio régimen israelí— debería coordinar compromisos de “reconstrucción” por miles de millones de dólares de terceros Estados. No solo [ha usurpado el papel de la ONU](#) y de las organizaciones internacionales, sino que tampoco ha proporcionado [ayuda adecuada a Gaza](#); además, desde el inicio de la guerra con Irán, la ayuda a Gaza ha [disminuido en un 80%](#). Diseñado para eximir al régimen israelí de críticas, el BoP impide la intervención de la ONU y otros Estados, transfiere la responsabilidad legal y financiera del genocidio y redefine las reparaciones como reconstrucción liderada por donantes. De este modo, consolida el control en manos de actores externos, margina a los palestinos y erosiona su derecho a la autodeterminación y a las reparaciones. La Resolución 2803 y el plan de 20 puntos de Trump niegan una autoridad significativa sobre gobernanza, tierra y recursos, reproduciendo el dominio colonial israelí bajo el pretexto de la “reconstrucción”.

Desde la entrada en vigor de las leyes de prohibición en enero de 2025, el régimen israelí [ha negado visados y permisos a la UNRWA](#) y ha [demolido su sede en Jerusalén](#) en enero de 2026. Continúa obstaculizando su ayuda y servicios, especialmente en Gaza, donde las operaciones de la UNRWA salvarían vidas. Como resultado, se han producido graves [reducciones en servicios](#) sanitarios, educativos y de emergencia debido a la falta de apoyo financiero y político de los Estados. El ex Comisionado General Lazzarini [advirtió](#): “En ausencia de una entrada significativa de nuevos fondos, la prestación de servicios esenciales a millones de refugiados palestinos en la región se verá comprometida”. Al reducir la financiación y desviarla hacia otras organizaciones, los Estados no solo son cómplices del genocidio, sino que tampoco garantizan la protección de los derechos de los refugiados palestinos. Al permitir que el régimen israelí proscriba una agencia de la ONU, los Estados permiten que la ayuda sea instrumentalizada para una agenda colonial y genocida.

Más allá de la provisión de ayuda y servicios, la UNRWA desempeña un papel crucial en el sostenimiento del derecho al retorno palestino. La Agencia tiene el mandato de operar hasta la implementación del Artículo 11 de la [Resolución 194](#) de la Asamblea General de la ONU: el derecho a las reparaciones (incluido el retorno, la restitución de propiedades, la compensación y la no repetición). En términos fundamentales y políticos, la eliminación de la UNRWA forma parte de una campaña israelí más amplia para eliminar el derecho al retorno palestino. La retirada del apoyo político y financiero de los Estados refuerza su complicidad y viola su obligación de garantizar protección. Los Estados no solo están obligados a apoyar a la UNRWA, sino también a rechazar cualquier propuesta que promueva su eliminación, como el plan de 20 puntos de Trump, el BoP y las leyes israelíes que prohíben la UNRWA. Esto incluye la [Evaluación Estratégica de la ONU sobre la UNRWA](#), que [plantea escenarios para su colapso](#). Es importante subrayar que la adopción de enfoques y mecanismos coloniales por parte de los Estados contribuye a normalizar los crímenes israelíes y a arraigarlos en la Palestina histórica y la región.

La aplicación del modelo genocida del régimen israelí al Líbano es otro ejemplo de esta normalización y arraigo. Permitir las violaciones israelíes de otra falsa tregua ha llevado al desplazamiento de [más de un millón de personas](#) bajo el pretexto de evacuación, al ataque de

personal e instalaciones de la ONU, así como de trabajadores humanitarios y periodistas, y a la destrucción de pueblos enteros e infraestructuras públicas y de servicios para impedir el retorno y asegurar la expansión colonial israelí. Los refugiados palestinos en el Líbano, incluidos aquellos [desplazados forzosamente](#) desde Siria, han sido nuevamente desplazados. En línea con el Plan Decisivo, la expansión colonial israelí debería extenderse más allá de Palestina, incluyendo el Líbano, Siria, Jordania y Egipto, para establecer el “Gran Israel”.

El apoyo al régimen israelí también se refleja en las [políticas internas de los Estados](#): represión, silenciamiento y criminalización de toda forma de solidaridad con el pueblo palestino. Mientras la Unión Europea continúa manteniendo su acuerdo económico con el régimen israelí, reforzando su complicidad, es más urgente que nunca que el movimiento de solidaridad intensifique las acciones directas para romper el statu quo e imponer un coste material. Solo mediante una presión sostenida y coordinada sobre los Estados para que pongan fin a su complicidad e [impongan sanciones militares, políticas y económicas](#) al régimen colonial de apartheid israelí será posible detener sus crímenes.

La rendición de cuentas por los crímenes israelíes en curso y por la complicidad de los Estados comienza con la imposición de sanciones destinadas a dismantelar las estructuras de dominio y opresión israelíes. La adopción de un marco global de [descolonización basado en derechos](#), que sitúe en el centro el derecho del pueblo palestino a la autodeterminación y al retorno, representa la única solución a la Nakba en curso.

Una declaración del BADIL Resource Center for Palestinian Residency and Refugee Rights y de la Global Palestinian Refugee and IDP Network (GPRN).